

La España desindustrializada y sus candidaturas electorales

ALBERTO CUBERO

Secretario general del Partido Comunista de Aragón

El debate sobre despoblación en la llamada «España vaciada» establece una falsa dicotomía entre rural-urbano que no es tal. Cuando hablamos de despoblación situamos encima de la mesa toda una serie de agravios comparativos entre lo rural y lo urbano: ferrocarril, comunicaciones, servicios o la propia conexión de Internet, situándolos en un mismo plano de igualdad con el empleo como responsables de la despoblación. Y no es cierto, los pueblos no se vacían por ser zonas rurales con determinados agravios comparativos con respecto a las ciudades, sino por carecer de tejido productivo que ofrezca posibilidades de ganarse la vida a sus gentes.

Los cimientos de la «España vaciada» se empezaron a construir en la década de los sesenta tras la aprobación del Plan de Estabilización en 1959, que puso fin a la autarquía dando comienzo a un desarrollismo industrial español altamente desigual y desequilibrado que hizo que durante dicha década tres millones de españoles y españolas abandonaran su lugar de origen para emigrar a aquellas zonas que demandaban mano de obra (País Vasco, Cataluña y Madrid fundamentalmente). Solo desde Andalucía partieron a Cataluña cerca de un millón de trabajadores en busca de un trabajo que en su tierra se les negaba. La provincia de Teruel perdió el 37% de su población entre 1950 y 1980, y es que mientras España ha duplicado su población en los últimos cien años, Teruel ha perdido la mitad de sus habitantes en este mismo período.

Si se hablase de la «España desindustrializada» entenderíamos mejor el porqué de la despoblación. Las infraestructuras y la comunicación son importantes en el desarrollo de un territorio y en sus posibilidades de fijar población, pero lo que determina que la gente viva o no en un territorio es la existencia de empleo. Por Calatayud (Zaragoza) pasa la nacional II y tiene parada de AVE desde hace veinte años, pero desde que se inauguró dicha parada ha perdido el 10% de su población.



El factor empleo es el determinante para la despoblación, y difícilmente puede existir empleo allí donde no hay industria, principal motor del desarrollo económico. Quizá en un futuro el teletrabajo permita otras posibilidades de empleo en las zonas rurales, pero hasta el momento la existencia o no de industria determina que una zona rural sufra o no el despoblamiento. Incluso la agricultura y la ganadería tienen un impacto en el empleo varias veces mayor si la actividad primaria va acompañada de una transformación del producto, es decir, de industria alimentaria.

En Aragón conocemos bien la importancia de la industria, pues somos la segunda comunidad autónoma más industrializada de España, solo por detrás de Navarra y al mismo nivel que el País Vasco. La sola presencia de una fábrica de coches (OPEL Figueruelas) genera más de 20.000 empleos directos e indirectos, siendo la locomotora de toda una comunidad autónoma, pero especialmente del valle del Ebro aragonés.

Pero Aragón es territorialmente enorme (siete veces más grande que el País Vasco con la mitad de población), así que también conocemos bien el impacto de la desindustrialización y sus efectos sobre la población. La crisis de la industria del calzado y su afección a la comarca de Aranda es un buen ejemplo, ya que en esta comarca la población ha caído un 21 % desde 2003. Una comarca que conseguía no perder población gracias a la citada industria, pero que en poco tiempo ha visto cómo muchas de sus fábricas han cerrado y las que han permanecido abiertas ha sido a costa de externalizar a otros países buena parte del proceso productivo. El cierre de las minas también ha provocado la pérdida de más del 20 % de la población de la comarca de las cuencas mineras turolenses. Y la reducción de la actividad y posterior cierre de la central térmica de Andorra ha hecho que esta comarca pierda el 15 % de su población en solo diez años, evidenciando que de momento eso de «transición justa» no pasa de ser un eslogan que queda bien en las campañas institucionales.

Pero Aragón es extenso, y las comarcas más industriales, por muy rurales que sean, no sufren la despoblación. La comarca de la Ribera Alta del Ebro, donde se ubica la factoría de Figueruelas, no solo no ha perdido población, sino que en la década previa a la crisis de 2008 logró incrementar su población en un 50 % y desde entonces ha logrado conservarla. Otro ejemplo es la comarca de Valdejalón, con los municipios de La Almunia y Épila a la cabeza y con un mayor tejido industrial, alguna de esas industrias auxiliares de la planta de Figueruelas, que ha visto incrementar su población en un 40 % en los años previos a la crisis de 2008 y desde entonces ha sido igualmente capaz de sostenerla.

Luchar contra la despoblación implica necesariamente apostar por un tejido productivo que ofrezca posibilidades de sustento a sus habitantes, actuales y futuros. Un tejido productivo que no debe ser únicamente industrial, pero que necesariamente debe contar con un sector industrial significativo. Y



para ello es fundamental la intervención pública. La España vaciada no puede confiar en el libre mercado, en que las empresas acudirán a su territorio con inversiones que generen empleo y riqueza de una manera sostenible. No ha sucedido en los últimos cincuenta años y no sucederá mientras nos basemos en un modelo cuyo único objetivo sea maximizar beneficios. No hay futuro dentro de este modelo para la mayor parte de municipios de nuestro país, bajo el que están condenados a la desaparición.

Por ello, de la misma manera que el desarrollismo de los sesenta fue dirigido por el Estado que apostó por convertir a España en la mano de obra barata de Europa, en la actualidad deben ser las diferentes administraciones públicas y Gobiernos los que planifiquen y dirijan la industrialización de la España desindustrializada. Y para ello es fundamental una fiscalidad justa e invertir esos recursos públicos directamente en el tejido productivo, y no dilapidarlo en rebajas fiscales y subvenciones a multinacionales que cogen el dinero público y luego se marchan cuando ya no les interesa seguir.

Pero no solo es suficiente con inversión pública: esta debe ser invertida con un control y planificación públicos. Una inversión cuyo objetivo no debe ser generar los mayores beneficios y de la manera más rápida para los caciques locales, pues ya vimos qué ocurrió con los planes Miner o FITE en la provincia de Teruel. Miles de millones de las antiguas pesetas fueron despilfarrados en construir pabellones, pistas de pádel o piscinas en los pueblos de Teruel que no asentaron población ni son empleados por una población envejecida, que son las que se mantienen residiendo en los pueblos. Eso sí, cuando los hijos y nietos de los emigrados vuelven a veranear a los pueblos pueden encontrarse con mejores instalaciones deportivas que en sus barrios obreros de Zaragoza. Todo un despropósito propio de un sistema depredador.

Aquellos recursos fueron manejados bajo la lógica del máximo beneficio en el menor tiempo posible; en una España del pelotazo y la corrupción la construcción y el cemento eran la manera de obtener ese beneficio rápido, pero ni se creó empleo ni se asentó la población en el territorio. Ante una ausencia de política industrial y de sector público en el que invertir, todo el dinero fue dilapidado en obras que permitían volver a ganar elecciones, pero que en poco contribuían a revertir la lógica de la despoblación a la que estaban condenados aquellos territorios que habían visto su sector productivo desaparecer.

Es por tanto necesario reorientar las inversiones públicas a reindustrializar nuestro país, y en especial aquellas zonas más desindustrializadas que hoy se llaman España vaciada.

Una inversión que además debe apostar por un tejido productivo que sea sostenible, por lo que debe asentar población en el territorio, pues tan preocupante es la despoblación como la acumulación de población en grandes urbes. Pero también respetuoso con el entorno, y ahí la política industrial del Gobierno de Aragón es el mejor ejemplo del camino al desastre, como territorio



y como planeta. Estaciones de esquí a base de cañones que suplen una nieve que ya apenas cae del cielo, macrogranjas de cerdos que contaminan nuestros acuíferos, megaproyectos de renovables con enorme impacto ambiental y multinacionales depredadoras como Amazon son la carta de presentación de un Lambán que gobierna bajo la máxima de que el cambio climático no puede arruinar un buen pelotazo.

Un tejido industrial que se apoye en el sector primario transformando el producto agrícola y ganadero, que aproveche las potencialidades del mundo rural, pero que también tenga en cuenta que la despoblación ya no es debida a la emigración, como en los años del desarrollismo, sino al crecimiento vegetativo negativo debido a una población envejecida que no se reproduce y que lógicamente tiene una elevada mortalidad.

Son ya ocho de cada diez municipios en España los que tienen más defunciones que nacimientos, pero este problema no es nuevo; se lleva sufriendo desde hace mucho tiempo. Comunidades como Galicia, Asturias o Castilla y León llevan manteniendo un crecimiento vegetativo negativo desde los años ochenta. Esto se agrava en los municipios más pequeños: en los menores de mil habitantes son ya tres de cada diez los vecinos mayores de 65 años y un 15 % los que superan los 80 años.

Por lo tanto no se trata solo de ofrecer alternativas laborales a los habitantes del mundo rural para que permanezcan en sus pueblos, sino que es necesario atraer gente al mundo rural con un proceso de reindustrialización desde el control público como el que hemos explicado. La inmigración inversa de la ciudad al campo atañe enormes retos como el impacto cultural y de estilo de vida, y además debe enfrentar la realidad de que existe un agravio comparativo en cuanto a todo tipo de servicios.

Es precisamente ese agravio comparativo el aprovechado por las candidaturas de la denominada España vaciada para explotar un victimismo más que justificado, en torno al cual han generado el apoyo suficiente para entrar con éxito en el juego electoral. Lo lograron en las últimas elecciones generales con la candidatura Teruel Existe situando un diputado en el Congreso.

Lo primero que toca desmentir es esa impresión de proyectos de izquierda y contestatarios que tienen en el imaginario colectivo las candidaturas de la España vaciada. El hecho de que Teruel Existe apoye a un Gobierno PSOE-UP y las amenazas de grupos fascistas que sufrió Guitarte, su diputado en el Congreso, no son motivos suficientes para considerarlos de izquierdas. El principal argumento que se empleó hace ya tres años en el seno de Teruel Existe, cuando se planteaba presentarse a las elecciones, era hacer como CIU y PNV: pedir «para su territorio» a cambio de apoyar al Gobierno de turno.

Por lo tanto el hecho de que el Gobierno posible fuera el del PSOE-UP no debe hacernos dudar de que si fuera otro Gobierno de derechas el posible, también contaría con el apoyo de estas candidaturas de la España vaciada, como



en el pasado hizo CIU, PNV y Coalición Canaria en el pacto del Majestic que dio el Gobierno al PP de José María Aznar en 1996.

De hecho, cuando han sido leyes de carácter social las debatidas e impulsadas por el Gobierno en estos dos años de legislatura no ha contado con el apoyo de Teruel Existe, como la ley de eutanasia o la conocida como ley Celaá que eliminaba privilegios de la escuela privada concertada. En ambos casos Teruel Existe se mantuvo en la ambigüedad de la abstención.

Su mayor propuesta en política económica es plantear una fiscalidad territorial donde paguen menos los habitantes de las zonas despobladas independientemente de su renta. Cogen el mantra neoliberal de la bajada de impuestos generalizada como remedio para todos los males, cuando precisamente lo que necesitan estos territorios es inversión pública, la cual solo puede lograrse desde una mayor recaudación fiscal. Apuntarse a la bajada de impuestos ayusista es un tiro en el pie para la llamada España vaciada.

La apuesta política de las candidaturas de la España vaciada apunta maneras al tener a CIU y PNV como referentes. Su objetivo es ser determinantes a la hora de configurar una mayoría, ya sea de derechas o de izquierdas, eso es lo de menos, y aprovechar sus diputados para entrar en una subasta de quién me ofrece más. Lo malo además es que no parece que sus reivindicaciones vayan a ir en la línea de inversiones que creen tejido productivo, sino de bajada de impuestos o de inversiones en infraestructuras que por sí solas son insuficientes a la hora de ofrecer un futuro (recordemos de qué le ha servido a Calatayud tener parada de AVE entre Madrid y Zaragoza).

Llama la atención que una propuesta política de este calado pueda ser vista con simpatía por sectores sociales progresistas de esos territorios, pero hay que entender que el nacionalismo, o provincialismo en este caso, no es igual cuando se produce en una zona privilegiada respecto al entorno que cuando se da en una desfavorecida. De esta manera, las candidaturas de la España vaciada son una suerte de altavoz para unos pueblos olvidados por todos los Gobiernos, y eso les genera una simpatía más allá del contenido de su programa. Por ello, tampoco nos debería sorprender si al final su caladero de votos se encuentra en mayor medida en el electorado de izquierdas.

En las últimas elecciones generales en la provincia de Teruel fue precisamente Unidas Podemos la que más votos perdió con la presentación de la candidatura de Teruel Existe. Ante la pregunta de fidelidad de voto en las encuestas sobre las candidaturas de la España vaciada, los votantes del PP y Vox mantienen más de un 80 % de fidelidad de voto, mientras los votantes del PSOE y UP apenas poco más del 60 %.

La solución para estos territorios no vendrá sin embargo de las denominadas candidaturas de la España vaciada, aparentemente sin ideología y que apuestan su éxito a explotar un victimismo más que justificado. Ponen en el centro la comparación con las ciudades en materia de servicios e infraestruc-



turas, pero pasan de refilón sobre la cuestión de la reindustrialización y el empleo. Algo, por otra parte, lógico si consideramos el carácter «transversal» de estas plataformas que en su seno también incluyen empresarios cuyos intereses posiblemente no coincidan con los de la mayoría social.

Frente a esta realidad económica, social y política que hemos descrito, la izquierda debemos tener un plan y un programa de transformación sostenible, de clase y solidario que incluya al mundo rural, que ponga en el centro el factor trabajo como contradicción fundamental de la sociedad también en cuanto a la despoblación. Un proyecto de ruptura con este modelo bajo el cual no hay futuro para buena parte del mundo rural que está condenado a la despoblación. El cambio de modelo es la única esperanza de la España desindustrializada y solo la izquierda lo puede defender. ★

